

JUZGADO DE INSTRUCCION Nº 6 DE SEVILLA

Av. Menéndez y Pelayo s/n.

Teléfono: 955005289/90. Fax: 955005291.

Procedimiento: DILIGENCIA PREVIAS 174/2011. **Negociado:** CH

N.I.G.: 4109143P20116000008.

A U T O

En SEVILLA a treinta y uno de octubre de dos mil trece.

HECHOS

ÚNICO.- Se ha recibido en este Juzgado testimonio del auto dictado por la Sección Séptima de la Il.ª Audiencia Provincial de Sevilla, revocando parcialmente el auto de este Juzgado de fecha 28 de junio en relación a Doña Magdalena Álvarez.

Asimismo, procedente de la Intervención General del Estado, se ha recibido escrito de los Interventores dando cuenta del estado de su informe.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Se ha recibido la resolución dictada por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla (auto de 25 de octubre de 2013), sobre el recurso de apelación interpuesto contra

el auto de este juzgado dictado el 28 de junio pasado, en el que ordenaba llamar al procedimiento a diversas personas como imputados en función de los cargos que a lo largo de la última década habían desempeñado en la Administración Autonómica, siendo una de ellas Doña Magdalena Álvarez Arza, Consejera de Economía y Hacienda desde 1994 hasta el 7 de febrero de 2004. Estima la citada resolución dictada en grado de apelación, que cuando el giro de la investigación no es consecuencia de petición de parte acusadora, sino de la valoración que la propia Magistrada-Juez hace del material de la instrucción se exige una motivación reforzada, teniendo en cuenta además la excepcionalidad del caso en el que parece existir apariencia de antijuridicidad en las modificaciones presupuestarias e incluso en los presupuestos de la Comunidad Autónoma, por lo que debe dictarse un nuevo auto que agote tales exigencias.

Pues bien, a este respecto no hemos de hacer otra cosa que reproducir la imputación que le fue leída detenidamente por esta instructora a la Sra. Álvarez Arza el día 8 de octubre de 2013 con carácter previo a su declaración judicial, la cual arrancaba del razonamiento básico del citado auto de 28 de junio pasado, pero explicando cómo entendemos, en términos de presunción, que fue su ilícita intervención en los hechos y los pasos que la misma dio en connivencia con otros, para instaurar el ilegítimo sistema de las

transferencias de financiación para la concesión de subvenciones sociolaborales por la Consejería de Empleo, primero a través de las modificaciones presupuestarias y luego a través de la inclusión del sistema en las sucesivas Leyes de Presupuestos, y citar a la Sra. Álvarez Arza, a fin de colmar las exigencias de su derecho de defensa para el próximo día 7 de noviembre de 2013 por si quisiera ampliar en algún extremo su declaración.

Los hechos en que se fundamenta su imputación son los siguientes:

1.- La inculpada, Dña. Magdalena Álvarez Arza, Consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía desde el 02 de agosto de 1994 hasta el 07 de febrero de 2004, fue una de las promotoras, en connivencia con otros, del procedimiento ilegal de concesión de subvenciones sociolaborales que se instaurarían en la Administración Autonómica desde el año 2000 y que perduraría hasta el año 2011. Dicho procedimiento consistía en dotar a la Consejería de Empleo de un crédito presupuestario, las denominadas “transferencias de financiación”, legalmente inadecuado para el otorgamiento de tales subvenciones, pues su finalidad era financiar operaciones genéricas de los entes o empresas públicas; para ello, con la necesaria habilitación presupuestaria de la cual la Sra. Álvarez sería responsable, la

Consejería de Empleo transferiría al Instituto de Fomento de Andalucía (I.F.A.) los referidos fondos para realizar los pagos a terceros ordenados por la citada Consejería: La consecuencia era obvia, no se tramitaban por ésta expedientes de subvenciones, sino expedientes de transferencia de financiación a I.F.A. con vulneración flagrante del procedimiento legalmente establecido, eludiendo los férreos requisitos legales de tramitación y fiscalización propios de las subvenciones públicas, mientras que para la tramitación del expediente de transferencia de financiación en la medida que era un instrumento financiero para dar cobertura a las pérdidas de una empresa, sólo era necesario comprobar la existencia de crédito suficiente y adecuado y emitir la orden de traspaso de fondos a I.F.A. en virtud de un calendario de pagos autorizado por la Dirección General de Tesorería, basándose en estos solos extremos la fiscalización del expediente.

La adopción de este procedimiento al margen de la Ley, se iniciaría por la inculpada puesta de acuerdo con otros, en virtud del interés de la Junta de Andalucía de dar mayor agilidad a los procesos de ayudas sociolaborales, pretendiéndose como finalidad básica eludir el control de legalidad que significaba la fiscalización previa de la Intervención en los expedientes de subvenciones, que tantos reparos suspensivos había opuesto en expedientes pasados

como el de Hijos de Andrés Molina (HAMSA).

Este uso ilegal de fondos públicos se permitiría por la inculpada junto con otros, a sabiendas de que necesariamente iba a realizarse con absoluta discrecionalidad, y de forma totalmente opaca, incumpliendo los más elementales principios de actuación de la Administración consagrados en el Estatuto de Autonomía, como el de imparcialidad, transparencia y no discriminación (art. 133.1) y los principios rectores de la actuación subvencionadora: publicidad, libre concurrencia, objetividad e igualdad (art. 107 LGHPCAA y art. 8.3 de la L.G.S. 38/2003), convirtiendo las referidas subvenciones, concedidas al margen de su procedimiento legal, en desplazamientos de fondos públicos a terceros por mera liberalidad.

Siendo el objetivo burlar el procedimiento legal de subvenciones, indiciariamente para llegar a instaurar éste procedimiento y disponer de gasto público, el paso previo era lograr dichos créditos presupuestarios, las transferencias de financiación, actuación en la que se incardinaría la participación de Dña. Magdalena Álvarez:

Primero durante dos años, 2.000 y 2.001, se optaría por

actuar al margen de la Ley de Presupuestos aprobada, utilizando la vía de las modificaciones presupuestarias, a partir de las cuales se crearía la denominada partida 440 “ Transferencia al I. F. A. en materia de Relaciones Laborales”, que no existía en los Presupuestos de dichos años y que se financiarían con baja en la partida adecuada para conceder subvenciones, como lo fue la partida 481 “ Transferencia a Familia e Instituciones sin ánimo de lucro”, ambas del programa 22 E. De esta forma se tramitaron por la Consejería de Economía y Hacienda de la que Dña. Magdalena Álvarez era titular, siete modificaciones presupuestarias para dotar de fondos a la partida de las transferencias de financiación, muchas de ellas en base a Convenios Particulares entre la Consejería de Empleo e I. F. A. para transferir a Hamsa, Jerez Industrial, Santana, importantes sumas de dinero en materia sociolaboral. Dichas modificaciones, aprobadas todas ellas por el Consejo de Gobierno a propuesta de la hoy inculpada, salvo una que fue autorizada por ella, ascendieron a la suma de 93.000.613 €.

El segundo paso, después de dos años de andadura, fue la introducción de dicha partida presupuestaria de las transferencias de financiación en el Presupuesto, concretamente en el año 2002 y de ahí en los sucesivos ejercicios económicos, tarea en la que también tendría una importante participación la hoy inculpada,

pues la elaboración de los Presupuestos era una de las competencias de su Consejería.

Para la inclusión de la partida fraudulenta en la Ley de Presupuestos, se aprovecharía la complejidad del lenguaje presupuestario, pues la clasificación económica del gasto por artículos y subconceptos sólo es accesible a expertos.

El resultado de lo anterior serían unas Leyes de Presupuestos, que partían de los Anteproyectos elaborados por la Consejería de Economía y Hacienda, de la que la Sra. Álvarez era su titular, que en relación al Programa 31 L de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, eran frontalmente contrarios a gran parte del ordenamiento jurídico; a la Constitución Española (artículos 9.1 y 103.1), al Estatuto de Autonomía (antiguo art. 12, actual art. 103), a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (art. 3), a la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza (arts. 38, 78 y s.s., art. 103 y s.s.), a la Ley 15/2001 de 26 de diciembre (art. 18), a la Ley General de subvenciones, al Decreto 254/2001 por el que se aprueba el Reglamento de subvenciones de la Junta de Andalucía y a la Orden de 22 de mayo de 1998 por la que se dictaban normas para la

elaboración de los Presupuestos.

La inclusión en el Presupuesto de dicha partida de transferencias de financiación daría lugar a un uso completamente arbitrario de los fondos públicos por parte de la Consejería de Empleo, como indiciariamente podía esperar la Sra. Magdalena Álvarez al no existir procedimiento ni control. También el uso sería desmesurado al asumirse compromisos por encima del techo presupuestario, generándose un déficit en IFA en los años 2003 y 2004 de 38 y 93 millones de euros respectivamente, al ser IFA la que adelantaba el caudal público.

En virtud de los compromisos cada vez más numerosos asumidos por la Consejería de Empleo, al margen de la ley, lo cual podía generar menoscabo de fondos públicos, la Sra. Álvarez titular de la Consejería de Economía y Hacienda contribuiría a alimentar la ilícita partida con la tramitación de nuevas modificaciones presupuestarias, concretamente cinco en el año 2002 que ascendieron a 32.197.303 euros, de los cuales, cuatro fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno a propuesta de la Sra. Álvarez y una autorizada por ella.

Finalmente la inculpada daría instrucciones o al menos sería

conocedora de que con este procedimiento era necesario alterar la realidad del presupuesto de explotación de IFA, pues al recibir los fondos de la Consejería de Empleo y figurar éstos como ingresos, hubo que simular en la elaboración del citado Presupuesto de explotación de la Agencia la existencia de gastos por parte de la misma, cuando sólo se realizaban pagos con los fondos recibidos, gastos inexistentes que se consignaban en la partida denominada “Otros gastos de Explotación”, según se observa en las distintas modificaciones presupuestarias.

Tales hechos podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación del art. 404 del Código Penal y un delito de Malversación de caudales públicos del art. 432 del mismo texto legal.

SEGUNDO.- Al margen del recurso, la Audiencia Provincial en su resolución muestra inquietud porque entiende que al referir la instrucción o los autos que en ella se dictan a que las Leyes de Presupuestos aprobadas por el Parlamento pudieran constituir un instrumento del fraude al erario público andaluz, no solo nos estaríamos refiriendo en hipótesis criminal a la ilicitud penal del gobierno autonómico, sino también a la del propio parlamento andaluz. Solicita por ello una motivación reforzada.

Pues bien, al margen de lo que se ha expuesto en los hechos que se imputan a la Sra. Álvarez Arza, en cualquier instrucción penal debe huirse de las generalizaciones: no hablamos del gobierno andaluz, sino de ciertos cargos de relevancia que por razón de sus competencias pudieron propiciar la instauración de este sistema ilegal o también denominado entre ellos “procedimiento específico”.

No obstante, por lo que respecta al Parlamento Andaluz, ni siquiera como hipótesis de estudio se ha planteado la existencia de responsabilidad y ello por las siguientes razones:

1.- En el Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre las ayudas sociolaborales otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía 2001-2010 se dice: “*En las sucesivas leyes de presupuesto de la CAA, antes reseñadas, se ha utilizado de forma inadecuada la figura de las transferencias de financiación*” y a continuación se dice cómo y las consecuencias que esto ha tenido. ¿Cómo ha sucedido?: “*En el proceso de elaboración de los Presupuestos de la Consejería y de modificación de los mismos se ha realizado una clasificación económica de los créditos inadecuada, consignando como “transferencias de financiación” del programa 31L lo que en realidad era créditos destinados a subvenciones que se iban a conceder por la Consejería.*” La consecuencia de lo anterior se produce en el proceso de ejecución presupuestaria, pues “*se han tramitado como*

transferencias de financiación expedientes de gasto de subvenciones excepcionales obviando el procedimiento legalmente previsto para gastos de esta naturaleza”, es decir el procedimiento subvencional con su correspondiente fiscalización previa por parte de la Intervención.

Fijémonos que la Cámara de Cuentas nos habla de que esto ha sucedido (al menos desde el 2002 en adelante), en el proceso de elaboración de los Presupuestos. En tal sentido es necesario exponer que de acuerdo con la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza y las Órdenes Anuales de Elaboración del Presupuesto, el proceso de elaboración de la Leyes de Presupuesto, y dicho con mayor precisión, la elaboración del anteproyecto y proyecto de presupuesto (que incluye el de la Consejería de Empleo y el de IFA-IDEA, por lo que aquí nos interesa), constituye un minucioso y dilatado procedimiento que es capitaneado por la Consejería de Hacienda y por su titular. En este sentido la citada LGHPCAA en su artículo 9 dice que *“Corresponde al Consejero de Hacienda elaborar y someter el acuerdo del Consejo de Gobierno el anteproyecto de la Ley de Presupuesto”*. Dicha elaboración se realiza a través de la Dirección General de Presupuestos a partir de los anteproyectos que remite cada centro gestor de cada uno de sus programas antes del 1 de julio de cada

año. A continuación se procede, constituyendo parte esencial de dicho proceso de elaboración, a la realización previa del análisis de los programas, análisis que se verifica por un grupo de trabajo del más alto nivel integrado por parte de la Consejería de Hacienda (Viceconsejero, Director General de Presupuesto, Secretarios Generales, Director General de Planificación, Director General de Fondos Europeos) y por parte de la Consejería examinada (Viceconsejero, Secretario General Técnico y responsables de los programas). El objetivo no es otro que examinar una vez que se tienen los anteproyectos de los centros gestores, el grado de ejecución, la necesidad, el coste y la dimensión de cada uno de los programas. El contenido de estos grupos de trabajo como parte del proceso de elaboración se prevé de manera repetida cada año en las Órdenes Anuales por las que se dictan las normas para la elaboración del Presupuesto de la Comunidad Autónoma que publica la Consejería de Economía y Hacienda.

¿Qué conclusiones podemos extraer? Pues que tras este análisis de los programas y en concreto del programa 31L, reiteradamente desde el 2002 al 2009 se incluyeron por parte de la Consejería de Hacienda créditos para transferencias de financiación del programa 31L, cuando en realidad se conocía indiciariamente que iban a destinarse inadecuadamente a subvenciones sociolaborales que otorgaría la Consejería de Empleo. Es decir, año

tras año la Consejería de Hacienda presuntamente tuvo que conocer cuál era el objeto del programa 31L de la Consejería de Empleo, es decir la concesión de subvenciones, que estas subvenciones eran otorgadas por la Consejería titular del programa, y no por el IFA/IDEA que hasta 2007 no adquiere potestad subvencionadora, y que las mismas se otorgaban a través del uso inadecuado, como fuente de financiación, de las transferencias de financiación, lo que no sólo era conceptualmente inadecuado: pues las transferencias de financiación están destinadas a equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias de las empresas públicas, lo cual se recoge en múltiples Leyes emanadas del Parlamento Andaluz (Disposición Adicional 2ª de la Ley 8/1997 de 23 de diciembre, art. 18 de la Ley 15/2001 de 26 de diciembre, y en las sucesivas Leyes de Presupuestos desde el 2000 al 2012); sino que en la práctica, en la fase de ejecución presupuestaria, tuvo indiciariamente unas consecuencias de alarmante ilegalidad: pues lo que debían ser subvenciones, no se tramitaban por su procedimiento legal, no se fiscalizaban como tales subvenciones, sino como meras transferencias de financiación a IFA/IDEA como si la misma tuviera un gasto real, cuando tan solo se trataba del pago por cuenta de un tercero. La consecuencia fue indiciariamente una absoluta falta de control sobre los beneficiarios, sobre las cantidades dispuestas y su destino, además de un oscurantismo total para el común de la ciudadanía, pues no existía

publicidad de tales subvenciones, no existían bases reguladoras, y un incremento año tras año del déficit presupuestario, pues IFA/IDEA adelantaba los compromisos de pago de la Consejería, que crecían en muchos casos por criterios ajenos al interés general.

2.- Partir de la consideración de que esta indiciaria maquinación delictiva en la elaboración de los Presupuestos era además conocida por el Parlamento, supone restarle complejidad técnica a la Ley de Presupuestos y presuponer en los Parlamentarios un conocimiento exquisito en materia presupuestaria, más bien propio de un experto.

La única Ley que existe en el ordenamiento jurídico que tiene previsto un régimen sistemático de modificación, es la Ley Presupuestaria. Este no sólo tiene la finalidad de adecuar los créditos aprobados a una realidad socio-económica que cambia y que precisa de reajustes, sino que también está previsto para corregir los errores materiales que se hubieran producido en la elaboración del presupuesto, como pudieran ser estimaciones erróneas de gasto o aplicaciones presupuestarias equivocadas. Es tan compleja la técnica, el lenguaje y la codificación presupuestaria, desde el capítulo, artículo hasta el nivel de subconcepto, que los Parlamentarios, según manifestó D^a Magdalena Álvarez, disponen desde el 2006 de una Oficina Parlamentaria para ser asesorados en

materia de Presupuestos. En este sentido se pronunció el Jefe del Servicio de Presupuestos de Actividades Sociales desde el 1 de enero de 1987 hasta el 5 de septiembre de 2005 Don Pedro Sigüenza Vélez, quien manifestó en sede policial que la Ley de Presupuestos es difícil de entender, desde luego no es entendible para un ciudadano medio y requiere cierta preparación para su comprensión.

En cualquier caso, dicha conclusión es avalada por la simple lectura de cualquier Ley de Presupuestos, su articulado y estado de gastos y por la máxima de experiencia de que no han sido gratuitos o naturales los conocimientos que dispone esta Instrucción relativa a esta materia.

3.- El Parlamento parte del cumplimiento de la legalidad por el Ejecutivo cuando le remite para su examen, enmienda, aprobación y control, el Proyecto de Ley de Presupuestos según el art. 190 del Estatuto de Autonomía, pues en tal sentido es determinante el artículo 38 de la LGHPCA que establece que los créditos autorizados en los estados de gasto del Presupuesto tienen carácter limitativo y vinculante de acuerdo con su clasificación orgánica, por programas y económica a nivel de artículo, siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos y las disposiciones generales con rango inferior a Ley que infrinjan esta norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar.

El Parlamento al abordar el examen del Proyecto de Ley de Presupuestos de los años 2002-2009 carecía del conocimiento exhaustivo de los programas del que disponía la Consejería de Hacienda al elaborar el anteproyecto, y asimismo desconocía las advertencias de lo que estaba ocurriendo con las transferencias de financiación, expuestas en los Informes de la Intervención General, de las que tuvo también indiciario conocimiento la Consejería de Hacienda a partir del 2005 además de las Consejerías implicadas.

Por ello el Parlamento al aprobar el crédito de Transferencias de Financiación Al IFA correspondiente a la Consejería de Empleo, aprobó créditos para cubrir las pérdidas que IFA tuviera, no para conceder subvenciones sociolaborales, máxime cuando el presupuesto de IFA arrojaba unas pérdidas que iban a ser cubiertas con dichas transferencias de financiación.

Esta y no otra era la función y naturaleza que el propio Parlamento había venido atribuyendo a la referida figura de financiación en diversas leyes: por ejemplo en la citada Disposición Adicional 2ª de la Ley 8/1997 de 23 de diciembre y en el art. 18 de la Ley 15/2001 de 26 de diciembre en el que se decía expresamente *“Las cantidades percibidas por las empresas de la Junta de Andalucía con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma para financiar su presupuesto de explotación, tendrán la naturaleza de transferencia de financiación solo en la cuantía necesaria para*

equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que fueron otorgadas o para enjugar pérdidas de ejercicios anteriores...

La Consejería de Economía y Hacienda dictará las normas necesarias para articular el procedimiento de reintegro en la Tesorería de la Junta del importe de las transferencias no aplicadas.”

En las Leyes de Presupuestos de la Junta de Andalucía de los años 2000 y 2001 se establece “*Las aportaciones de la Junta de Andalucía para financiar la gestión de las empresas de la Junta de Andalucía se efectuarán a través de subvenciones de explotación y subvenciones de capital... por el importe consignado en sus presupuestos... El abono de dichas subvenciones se realizará mediante transferencias de financiación de acuerdo con los créditos consignados en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones. La concesión de cualquier otra subvención para financiar actuaciones propias de las empresas se realizará de acuerdo con los procedimiento regulados en el Título VIII de la Ley General de la Hacienda Pública.*”

En similares términos, aludiendo a la figura de las transferencias de financiación para financiar la actividad de las empresas públicas se pronunciarían las sucesivas Leyes de Presupuestos.

En conclusión y como quiera que el Parlamento andaluz no

modificó en las diferentes leyes dictadas la naturaleza y contenido de las transferencias de financiación, el Parlamento al aprobar el crédito de transferencias de financiación al IFA, aprobó créditos para cubrir las pérdidas que IFA tuviera, no para conceder subvenciones sociolaborales.

Si el ejecutivo andaluz pretendía realizar una política de subvenciones sociolaborales y para empresas en crisis, las normas presupuestarias exigían y exigen que ello quedara sin lugar a dudas contemplado en los estados de gastos del Proyecto de Presupuesto de la Consejería de Empleo, ajustándose a la clasificación económica establecida de conformidad con el citado art. 38, a fin de disponer de los créditos presupuestarios necesarios una vez autorizados por el Parlamento para tal finalidad. En modo alguno le era suficiente hacer una descripción somera en la Memorias de los Presupuestos, que no eran intencionadamente precisas para conocer con claridad el uso de las transferencias de financiación: en ninguna de ellas se describía el uso inadecuado de las transferencias de financiación, a lo más que llegaban era a mencionar la existencia de “un Convenio” con IDEA, ni de conformidad con el art. 129 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, las mismas forman parte de la Ley de Presupuestos, ni siquiera del debate parlamentario sobre el mismo, que sólo podrá referirse al estado de autorización de gastos.

En conclusión e indiciariamente la responsabilidad de introducir el crédito de transferencias de financiación al IFA en el Presupuesto de la Consejería de Empleo, para después ser aplicado a otorgar subvenciones, como ha quedado explicado en anteriores imputaciones de los Consejeros Don Antonio Fernández García y Doña Magdalena Álvarez Arza, y de los Directores Generales de Presupuesto Don Antonio Vicente Lozano Peña y Don Buenaventura Aguilera Díaz, fue de la Consejería de Empleo y de la Consejería de Hacienda, máxime cuando en ésta última se elaboró el presupuesto de IFA, reflejando indebidamente pérdidas que no se iban a producir, las cuales quedaban compensadas con las transferencias de financiación, encubriendo al Parlamento el destino final que realmente quería dársele: otorgar subvenciones sociolaborales al margen del procedimiento legal.

TERCERO.- La tercera cuestión que aborda el auto de apelación es la posible participación de aforados y que tras el “paso cualitativo” que se da con la resolución impugnada de 28 de junio pasado, *“cabría pensar que poco más queda por instruir salvo oír a los imputados, lo que podría corresponder en su totalidad al tribunal de aforamiento. En tal caso parece que podría haberse alcanzado el límite máximo de instrucción por el juez ordinario antes de elevarse la causa al juez competente...”*.

Cierta es la posible participación de aforados, como lo es que a fecha 10 de septiembre de 2013 se dictó por este juzgado auto en el que a los sólo efectos del art. 118 bis de la L.E.Crim. se comunicaba la existencia de las presentes actuaciones en calidad de imputados a siete personas, las cuales reunían la condición de aforados, entre las que se encontraban distintos titulares de las Consejerías afectadas, Hacienda, Empleo e Innovación, con lo que no existe, con la provisionalidad que cualquier afirmación en esta causa puede tener, ninguna ausencia destacable. También es cierto, y el mérito debe atribuirse a esa dignísima Sección, que dicha resolución fue dictada en buena medida por el auto de fecha 8 de agosto de 2013 dictado en grado de apelación, con independencia del acierto o desacierto de su contenido que esta instructora asume por completo. En dicho auto de 8 de agosto se decía lo siguiente: “... salvo que la conducta imputable al aforado sea escindible desde un principio de la del resto de los investigados, el Juzgado de Instrucción de origen debe apurar y depurar la instrucción practicando cuantas diligencias sean precisas para completar la investigación no sólo para acreditarlos sino también para determinar el grado de participación que en ellos hubiera podido tener la persona aforada, individualizando la conducta que respecto a ese aforado pudiera ser constitutiva de delito y constatando también que haya algún indicio o principio de prueba que pudiera

servir de apoyo a tal imputación.”

En esta resolución la Audiencia Provincial recordaba reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, en la de ahora como signo de exquisita prudencia realiza sus afirmaciones *“siempre con la reserva de que este tribunal carece de una perspectiva de conjunto de todo lo instruido...”*.

Pues bien, ambas conclusiones no son tan antagónicas como en principio pudiera parece: Esta instrucción que se inició a finales de enero de 2011, que no comenzó a desenvolverse con los medios policiales necesarios hasta seis meses después cuando se encomendó a la UCO de la Guardia Civil, y que se vio claramente relentizada durante los meses de baja por enfermedad de esta instructora, siempre ha respondido a un diseño bien definido, tan solo perfeccionado con los añadidos necesarios, por el devenir de la investigación y los constantes conocimientos adquiridos durante la misma, lo cual nada tiene que ver con una instrucción espasmódica.

La adquisición de nuevos conocimientos que generaban una amplitud de visión del objeto de la investigación, ha sido y es una constante en la presente causa, introduciendo cambios que han debido asumirse en muy poco tiempo. Estos conocimientos no sólo se han adquirido de la profusa documentación de la causa: básicamente está todo en ella, sino de las numerosas declaraciones

practicadas en sede policial y judicial, de las que se han obtenido sin lugar a dudas datos importantes, visión de conjunto (básico en determinadas materias de complejidad técnica) y sobre todo, una mayor comprensión de la documentación o información escrita.

Expuesto lo que antecede, con la provisionalidad antes mencionada, y con la convicción de que al menos la mayor parte de la causa es inescindible, orientación que apunta el auto de apelación y que en este momento de recapitulación se agradece, puede afirmarse que el final de la instrucción no está lejos, más bien lo contrario, pero todavía queda un trecho de importancia capital, no por el tiempo que ha de invertirse, sino por los contenidos que han de incorporarse a la causa para completar la investigación, a fin de determinar el grado de participación delictiva que pudieran haber tenido algunos de los aforados señalados, con la aportación en su caso de los indicios o principios de prueba que lo fundamente. Si es necesario, como lo es, individualizar la conducta ilícita que pudieran haber tenido estas personas en connivencia con otras que no participan de la condición de aforados, es imprescindible, antes de considerar alcanzado *“el límite máximo de instrucción”*, la incorporación de los siguientes elementos:

- 1) Por lo que respecta a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil:

- Debe aportarse el atestado de las ayudas de la Sierra Norte de Sevilla, con especial referencia a las otorgadas a Don Enrique Rosendo Ríos y Don José M^a Sayago Lozano.
- Y debe incorporarse el atestado de IFA/IDEA y Consejería de Innovación en relación a los hechos investigados.

Esta instructora está en disposición de afirmar, que ambos atestados serán entregados en corto periodo de tiempo y que los mismos han de culminarse con una Diligencia de Informe Final, donde como es lógico deberán exponerse las conclusiones de esta investigación a juicio policial.

Simultáneamente a lo anterior, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil procederá de manera inminente a la entrega de diversos informes de seguimiento de ayudas sociolaborales a empresas, así como informes patrimoniales y profundizará en determinados aspectos de los atestados 33/13 y 163/13.

- 2) Por lo que respecta a la Intervención General del Estado, es indudable, por constituir una de las piezas esenciales de la investigación, que el informe pericial encomendado debe entregarse, pues el contenido del mismo es imprescindible, en

primer lugar para entender el proceso, cómo se inició, cómo se desarrolló, su idoneidad o su ilegalidad, y en segundo término para individualizar en su caso las conductas presuntamente delictivas de aforados y no aforados.

Según el informe de avance emitido el 10 de octubre de 2013 por el director del equipo de peritos designados, *“Puede afirmarse que el trabajo se encuentra en su fase final y próximo a su terminación, por lo que se considera que el informe resultante de la pericial encomendada podría ser entregado en un plazo razonablemente corto.”*

- 3) Por lo que respecta a la Dirección General de Seguros, debe aportarse el informe de las sobrecomisiones solicitado en auxilio jurisdiccional, el cual puede ser también entregado en un plazo razonablemente pequeño, en sintonía con los informes anteriores.

Durante este periodo de tiempo, corto pero intenso, esta instructora debe continuar con el calendario de declaraciones y estudiar los informes que vayan llegando, que a buen seguro tendrán una extensión considerable. Por tanto, este equipo, ellos y yo, necesitamos calma para afrontar esta última etapa de trabajo y estudio, para encajar los cambios que puedan producirse todavía en

el desarrollo de la instrucción y poder en suma culminar con dignidad el trabajo que iniciamos hace menos de tres años “unos pocos incansables”.

PARTE DISPOSITIVA

De conformidad con los razonamientos jurídicos segundo y tercero de la presente resolución, se pone de manifiesto a las partes la planificación de las diligencias de instrucción pendientes. Y asimismo, de conformidad con lo expuesto en el fundamento primero, como motivación reforzada para la imputación de Doña Magdalena Álvarez Arza, se reproduce la que le fue leída con carácter previo a su declaración el día 8 de octubre de 2013 y se le cita nuevamente para el próximo día 7 de noviembre de 2013 a las 11,00 horas, a fin de colmar la exigencia de su derecho de defensa por si quisiera ampliar algún extremo de su declaración, citación que se verificará a través de su representación procesal.

Dese traslado al Ministerio Fiscal y partes personadas, del escrito recibido de la Intervención General del Estado.

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y partes personadas, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reforma y subsidiaria apelación, ante este mismo Juzgado, haciéndoles saber que las acusaciones populares deberán consignar el depósito legal para recurrir.

Así lo acuerda, manda y firma D. MERCEDES ALAYA
RODRIGUEZ, MAGISTRADO JUEZ del JUZGADO DE
INSTRUCCION Nº 6 DE SEVILLA y su partido.-